



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL.

Demandantes:	Gloria Elena Hernández Gómez.
Demandados:	Colfondos SA
Tipo de Proceso:	Ejecutivo Laboral.
Decisión:	Confirma auto.
Radicado	05001-31-05-020-2022-00191-01 (153) 05001310502020220019101

En la ciudad de Medellín, a los cuatro (04) días de septiembre de dos mil veintitrés (2023), la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el recurso de apelación presentado por la parte demandante, frente a la decisión adoptada por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, en el proceso ejecutivo laboral que Gloria Elena Hernández Gómez le adelanta a Colfondos SA,.

Una vez agotado el trámite previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala acoge el proyecto de la ponente que se traduce en la siguiente decisión:

AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA

I. ANTECEDENTES

La referida accionante persigue que el juzgado profiera mandamiento de pago contra Colfondos por el retroactivo más los intereses moratorios de las mesadas y las costas a los que fue condenado en sentencia proferida en el proceso ordinario, más los intereses corrientes sobre tales sumas (Págs. 2 a 4, archivo 01 Expediente Digital).

En auto del pasado 6 de febrero, el juzgado accedió a lo solicitado, librando orden de

pago contra la ejecutada por el retroactivo pensional causado desde el 12 de junio de 2012 y el 30 de septiembre de 2017 y las costas del proceso ordinario, pero negó la solicitud de intereses legales sobre las costas del proceso. En cuanto a los intereses moratorios exigidos no realizó pronunciamiento.

El recurrente solicita que se revoque lo decidido, para ello hizo uso de los recursos de reposición y en subsidio de apelación, con fundamento en que:

con fundamento en que las costas y agencias en derecho son por naturaleza una condena consecencial a las declarativas, las cuales se conceden objetivamente a la terminación del proceso declarativo, con fecha de aprobación y por ende de ejecución, lo anterior dándole cumplimiento al principio de economía procesal, evitando el desgaste del apartado judicial e iniciando un proceso declarativo adicional.

Por consiguiente, lo que se plantea es cuánto tiempo se tiene para el cumplimiento y/o pago de la sentencia, tiempo desde el cual se causará una mora o pérdida del valor adquisitivo. Si no se plantea el interés como sanción por no cumplimiento de su orden como Juez y en nombre de la República de Colombia, las condenas serían irrisorias y los demandados no tendrían interés oportuno en dar cumplimiento a las mismas.

(...)

Los intereses por la mora en el pago de la sentencia están implícitos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, si no se condena a los mismos, el proceso será irrisorio no cumpliéndose el mismo objetivo de la ley en el sentido de ejecución ya que quedaría abierta la solicitud de pago de la pensión y del retroactivo sólo cuando el ejecutado desee, pagando sumas con pérdida del valor adquisitivo incluso después de haberse enriquecido con el producido de inversión de las mesadas. Por lo tanto, es obligación del fondo de pensiones conceder los intereses moratorios desde que la obligación se hizo exigible, se configuró en mora y hasta que se haga efectivo el pago.

El despacho decide no reponer su decisión y concedió el de apelación en el efecto suspensivo, argumentando que:

Frente a los intereses legales del artículo 1617 del Código Civil, se advierte la inexistencia de norma sustantiva que castigue la conducta de las administradoras de fondos de pensiones por retardo en el pago de la condena en costas a que fueran condenadas.

Lo anterior atiende a la tesis que han venido sosteniendo algunas salas de Decisión Laboral del H. Tribunal de Medellín, en especial la sentencia No. 040 del 08 de febrero de 2013, M.P. HUGO ALEXANDER BEDOYA DIAZ, que establece, en los siguientes términos, la imposibilidad de aplicar por analogía los intereses legales o moratorios de origen civil pues la norma laboral consagra de manera expresa la indexación o corrección monetaria como consecuencia jurídica de la mora ante el pago y para su aplicación en el caso concreto debe ser impuesta expresamente en la sentencia, veamos:

“Es así como encontramos que dentro de la legislación laboral y de la seguridad social si bien se ha establecido el reconocimiento de intereses comerciales, ello en los artículos 23 de la Ley 100 de 1993 (referente al pago tardío de las cotizaciones al sistema), el artículo 41 de la misma ley (pago tardío de las mesadas pensionales) o el artículo 65 del CST (pago tardío de salarios y prestaciones sociales) dichas normas son precisas al indicar los casos que gobiernan, sin que quede abierto interpretaciones su posible extensión a casos distintos a los de allí consagrados.

De la enunciación precisa de algunos eventos de reconocimientos de intereses comerciales y de mora se concluye que la regla o principio general dentro de la legislación laboral y de la seguridad social, es la consagración de este tipo de intereses, salvo las excepciones que expresamente se estipulan, impidiendo así su aplicación extensiva a eventos como el acá expresado. Es por ello que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha entendido que la corrección monetaria procede como solución jurídica para el pago actualizado de las obligaciones en aquellos casos en que la ley laboral no se haya ocupado de reconocer la compensación de perjuicios causados por la mora en el pago, indexación que debe estar contempladas expresamente en la decisión judicial, sin que la misma se imponga de forma automática. Al respecto, lo pertinente la Sentencia del 20 de mayo de 1992 de la sala laboral de la CSJ”

Lo anterior, es congruente con lo expuesto en la sentencia SL 3449 de 2016 de la H. Sala de

Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia al considerar que le asistieron al recurrente cuando afirma que los intereses legales previstos en el art. 1617 del C.C. no son procedentes frente a acreencias de índole laboral, pues los mismos operan para créditos de carácter civil, tal y como lo sostuvo esta Sala de la Corte en sentencia CSJSL, 21 nov. 2001. rad. 16476, cuando al referirse a la norma en comento sostuvo:

De tal manera que la disposición transcrita consagra un régimen resarcitorio específico que gobierna las consecuencias del incumplimiento de obligaciones pecuniarias civiles de estirpe contractual, consistentes en el pago de sumas de dinero determinadas, conforme al cual acreditado en juicio el retardo del deudor, proceden ipso jure, a menos que las partes hayan estipulado un interés superior, como mínimo, a título indemnizatorio los referidos intereses moratorios, avaluados por el propio legislador quien los presume de derecho y cuantifica. Lo anterior comprende, como atrás se dijo, el lucro cesante, esto es, la ganancia o provecho que deja de reportarse. Pero como es menester contemplar las consecuencias de una economía inflacionaria, pues de lo contrario se llegaría al establecimiento de tasas negativas, debe agregarse la respectiva corrección monetaria (se resalta).

De igual modo, precisa que la legislación del trabajo ningún vacío presenta en cuanto a los intereses aplicables a deudas de carácter laboral, y, en esa medida, no hay lugar a la aplicación analógica de normas propias del Código Civil. De ahí, que una condena a intereses por la mora en el cubrimiento de créditos laborales, con fundamento en el artículo 1617 de dicho estatuto se exhibe equivocada, por cuanto se reitera, tal texto legal no es el llamado a gobernar el asunto. Por tal razón y, en este aspecto, el cargo es fundado.

Así las cosas, en procura de garantizar el principio de legalidad, no se accede a la pretensión de reponer el auto que libramiento de pago frente a los intereses legales en la condena en costas, por no hallarse fundamento jurídico para librar mandamiento de pago por este concepto.

Frente a los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se indica que, en la sentencia emitida por este Despacho se absolvió de todas y cada una de las pretensiones formuladas por la demandante en contra de la **COLFONDOS S.A.**, dicha decisión fue objeto de recurso de apelación por la apoderada de la parte demandante; en el mismo no se mencionó por su parte los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, razón por la cual el Tribunal Superior de Medellín no se pronunció al respecto.

Debido a lo anterior, al no haberse pronunciado el Tribunal Superior de Medellín frente a los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se carece de título ejecutivo al respecto, por lo que no es procedente por parte del Despacho librar mandamiento de pago frente a dichos intereses.

II. CONSIDERACIONES

2.1. PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala se ocupará de analizar, si la primera instancia se equivocó o no al negar la solicitud de mandamiento presentada por la parte activa, y específicamente, si el título ejecutivo contiene o no una obligación clara, expresa y exigible respecto de los intereses solicitados.

2.2. PRESUPUESTOS PARA LA VIABILIDAD DEL RECURSO.

Tenemos que hay legitimación en la parte que recurre porque con la decisión atacada hay mengua en sus intereses, el recurso es tempestivo, está cumplida la carga procesal de la sustentación y la providencia es susceptible de apelación.

2.3. PREMISAS NORMATIVAS

El artículo 100 del CPTSS, acerca de la procedencia de la ejecución, establece que:

Será exigible ejecutivamente el cumplimiento de toda obligación originada en una relación de trabajo, que conste en acto o documento que provenga del deudor o de su causante o que emane de una decisión judicial o arbitral firme.

Cuando de fallos judiciales o laudos arbitrales se desprendan obligaciones distintas de las de entregar sumas de dinero, la parte interesada podrá pedir su cumplimiento por la vía ejecutiva de que trata este Capítulo, ajustándose en lo posible a la forma prescrita en los artículos 987 y siguientes del Código Judicial, según sea el caso.

Por otra parte, el artículo 422 del Código General del Proceso, aplicable al procedimiento laboral en virtud de la remisión analógica del artículo 145 del estatuto procesal del trabajo, consagra que:

Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184.

De las disposiciones citadas, se extrae que puede ejecutarse una obligación que conste en documento que provenga del deudor, siempre y cuando la obligación contenida en este sea clara, expresa y exigible.

2.4. DEL CASO EN CONCRETO.

Descendiendo al caso en estudio, la ejecutante pretende el reconocimiento por parte de Colfondos, de las sumas que a título de intereses legales sobre las costas del proceso y de los intereses moratorios se deban a la actora.

Frente al recurso presentado por la solicitud de intereses moratorios, esta Sala de Decisión evidencia que el Juez A quo no realizó pronunciamiento alguno sobre esta acreencia en la providencia del 3 de febrero de 2023, si lo hizo en la del 23 de mayo de 2023, advirtiendo que *«al no haberse pronunciado el Tribunal Superior de Medellín frente a los intereses del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se carece de título ejecutivo al respecto, por lo que no es procedente por parte del Despacho librar mandamiento de pago frente a dichos intereses»*.

En ese contexto, le compete a la Sala determinar si los documentos aportados como título ejecutivo sirven de base para llevar a cabo la ejecución por vía judicial como lo estima el recurrente, o, por el contrario, se concluya como se indicó en el proveído discutido que el título ejecutivo no contiene una obligación clara y exigible.

En efecto, atendiendo que en el numeral segundo de la sentencia proferida el 19 de octubre de 2017, no se reconoció ni ordenó el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, no resulta procedente librar mandamiento por dicha acreencia.

Al este respecto, la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STL 738-2023, al resolver una acción constitucional, donde se discutía las razones por las cuales se niega librar mandamiento de pago por intereses moratorios al no estar contenidos en el fallo de primera instancia, señaló:

Pues bien, de entrada, se advierte el fracaso de la presente acción, como quiera que no viene acreditado el yerro que aduce la promotora, toda vez que luego de un examen atento del asunto, el tribunal consideró que no podía extenderse la orden de apremio al reconocimiento de perjuicios moratorios a favor de la demandante, dado que éstos no fueron reconocidos en forma clara y expresa en la sentencia que fungió como título ejecutivo. Así lo señaló el colegiado accionado en la providencia atacada:

[...] el proceso ejecutivo laboral no puede ser usado para declarar e imponer condenas patrimoniales, tal cual serían las sanciones moratorias o indemnizaciones que fueron denegadas en sentencias ordinarias. Por el contrario, debe recordarse que esta clase de procesos es un medio coercitivo, que tiene por objeto que el demandante haga efectivo un derecho subjetivo derivado de una condena en concreto y que puede hacer referencia a una obligación de dar, hacer o no hacer. Y por lo mismo, para su prosperidad, debe acreditar la existencia de una obligación clara, expresa y exigible, contenida en un título ejecutivo. Por lo que la función primordial del fallador, en todos los casos, es analizar con detenimiento el mismo y verificar si procede un juicio ejecutivo laboral a partir del examen del título [...].

Por lo anterior, recordó que el artículo 306 del Código General del Proceso, aplicable por expresa remisión del canon 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, regula los requisitos especiales para la ejecución de una sentencia.

De ahí, concluyó que, para que se pudiera librar mandamiento en la forma pretendida, se requería que en el texto de la parte resolutive de la sentencia judicial que es objeto de título ejecutivo, se hubiere ordenado dichas obligaciones, situación que no ocurrió, razón por la cual, confirmó la providencia de primera instancia.

Así pues, al analizar el asunto objeto de la presente acción, no le asiste razón a la parte actora cuando pretende que se deje sin efecto la providencia censurada, toda vez que no se observa que tal decisión haya sido caprichosa e inconsulta; por el contrario, se advierte que la autoridad accionada actuó dentro del marco de la autonomía e independencia que les ha sido otorgada por la Constitución y la ley, pues acertadamente, concluyó que debía abstenerse de librar orden de pago por los perjuicios de mora pretendidos, ello teniendo en cuenta que dicha obligación no estaba contenida en el título ejecutivo.

Conforme a lo expuesto, es claro que la decisión del juez no resulta caprichosa y sin asidero legal, pues de lo que se trata es un proveído apegado a las decisiones que se tomaron dentro del proceso declarativo, y de las cuales, no presentó oposición la hoy ejecutante.

En el mismo sentido, también se pronunció la Corte en sentencia STL 8787-2022, en un caso similar a este, donde se dijo:

Expuesto lo anterior, para la Sala es claro que la providencia que se pretende atacar por esta vía, no es arbitraria o caprichosa, ni está desprovista de sustento jurídico; por el contrario, se apoya en un análisis de la situación fáctica y jurídica sometida al escrutinio del fallador accionado, la cual

deviene de una estimación razonada, en tanto consideró el colegiado que, aunque los intereses moratorios contenidos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, proceden en el reconocimiento de toda clase de pensiones, aquellos deben ser reclamados por la parte interesada, es decir, no son oficiosos, dado el interés de parte en su reconocimiento y el debido proceso y de defensa que se debe garantizar al deudor ante su reclamación.

Con respecto a los intereses legales, el juez de primer se negó a incluirlos en mandamiento, aduciendo que *«considera el despacho que no hace parte de las obligaciones contenidas en el título a ejecutar por medio de este trámite judicial, por lo tanto, no es una obligación ni clara, ni expresa ni exigible, conforme la normativa vigente antes esbozada, y dicho concepto no fue ordenado en ninguna de las instancias»*.

Le asiste razón al a quo cuando indica que el documento que se pretende hacer valer como título ejecutivo no contiene una obligación clara, expresa y exigible por el concepto de intereses legales sobre las costas del proceso. Para emitir esta consideración, debe tenerse en cuenta lo normado en el artículo 280 del Código General del Proceso, que señala:

La parte resolutive se proferirá bajo la fórmula “administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley”; deberá contener decisión expresa y clara sobre cada una de las pretensiones de la demanda, las excepciones, cuando proceda resolver sobre ellas, las costas y perjuicios a cargo de las partes y sus apoderados, y demás asuntos que corresponda decidir con arreglo a lo dispuesto en este código.

Así mismo, en el artículo 283 del citado estatuto procesal, establece que:

La condena al pago de frutos, intereses, mejoras, perjuicios u otra cosa semejante, se hará en la sentencia por cantidad y valor determinados.

Ahora, los requisitos del título ejecutivo, exigen que en el mismo se encuentra una obligación clara, expresa y exigible; la claridad, va ligada a la determinación de la obligación, que se encuentre demostrado su objeto, quienes están obligados a ello y la determinación de un plazo o condición para su cumplimiento, mientras que, cuando se advierte que esta debe ser expresa, quiere ello decir que la misma de estar claramente determinada, especificada y constituida en el documento que se presenta como título, sin que en el caso bajo estudio aparezcan probado el cumplimiento de estos presupuestos.

El título ejecutivo en cuestión, se constituye a través de la sentencia dictada por esta Sala de Decisión, que data del 19 de octubre de 2017, en la cual respecto de las costas procesales se dispuso *«Se revocan las costas procesales de primera instancia, las cuales estarán a cargo de la parte demandada y a favor de la demandante, liquidación que corresponderá a la secretaria del Juzgado»*. De la lectura de esa condena, no extrae que se hubiese contemplado el reconocimiento de intereses legales por ese concepto, por lo que, resulta claro dilucidar que no se trata de una obligación ejecutable.

Por lo tanto, deberá la Sala confirmar la decisión del Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín.

Sin costas por no aparecer causadas.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar el auto proferido por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín el 6 de febrero de 2023, dentro del proceso ejecutivo laboral adelantado por Gloria Elena Hernández Gómez en contra de Colfondos SA, según las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: Sin costas por no aparecer causadas.

Las magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE
CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N° 155
del 6 de septiembre de 2023

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>